



► 12 Diciembre, 2015

# Educación: Acuerdos con metas ambiciosas

En lo que va de siglo, la política educativa ha sido tan enrevesada como desalentadora. Los acuerdos entre partidos deberían marcar a partir de 2016 la política sobre las cuestiones clave para el futuro de la educación española en todos sus niveles.



Elisa Chuliá

UNED y Funcas

En lo que va de siglo, la política educativa española ha resultado tan enrevesada como desalentadora. Entramos en él con una LOGSE (Ley de Ordenación General del Sistema Educativo Español) debilitada por las críticas de docentes y expertos, entre ellas, la de encallar a muchos alumnos en la enseñanza secundaria obligatoria (ESO) comprensiva y obtener su salida hacia la formación profesional al exigirles para ello el título único de graduado en ESO. En 2002, bajo el segundo gobierno de Aznar y doce años después de aprobada la LOGSE, se promulgó la LOCE (Ley Orgánica de Calidad de la Educación). Enarbolando el mérito y el esfuerzo como valores centrales en la educación, la LOCE establecía entre las diferentes opciones de titulación en ESO los programas de iniciación profesional (PIP), orientados a los alumnos con menor rendimiento educativo.

La LOCE nunca llegó a implantarse, ya que, en abril de 2004, el recién constituido gobierno de Rodríguez Zapatero decretó la paralización de su aplicación. La LOGSE continuó, pues, vigente hasta la aprobación de la LOE (Ley Orgánica de Educación) en 2006, que salvaguardaba la estructura básica del sistema, tratando de ajustarla mejor al objetivo de reducir el abandono escolar. Corto fue el recorrido de la LOE, sustituida en 2013 por la LOMCE (Ley Orgánica de Calidad de la Educación) del gobierno de Rajoy. Además de introducir la evaluación externa (con revalidas al final de la ESO y de Bachillerato), la LOMCE ha recuperado de la frustrada LOCE la organización más flexible de la ESO, estableciendo dos opciones en su último curso, una de enseñanzas académicas conducente al Bachillerato, y otra de enseñanzas aplicadas para la iniciación a la formación profesional. Hoy, a pocos días de las elecciones generales, desconocemos si la ya iniciada implantación gradual de la LOMCE logrará completarse, toda vez que dos de los ahora "cuatro grandes" partidos (PSOE y Podemos) han anunciado su voluntad de derogar la ley.

La senda desde la LOGSE a la LOMCE, pasando por la LOCE y la LOE, ha quedado sembrada de agrias disputas entre socialistas y populares. Aunque simbolizada a menudo en asuntos de orden secundario (como las asignaturas de Educación para la Ciudadanía o Religión),

la principal divergencia entre unos y otros reside en sus prioridades ideológicas. El PSOE prima las dimensiones integradoras e igualitarias de la educación; en consecuencia, rechaza la segregación temprana de los alumnos y, en su lugar, aboga por la atención docente a la diversidad para apoyar a quienes muestran más dificultades de aprendizaje u obtienen peores resultados escolares.

En cambio, el PP antepone la excelencia académica, la libertad de elección de las familias y la selección del alumnado, defendiendo la diversificación de las vías formativas dentro de la educación obligatoria.

Lo cierto es que mientras los dos partidos se han enzarzado en debates si no bizantinos, sí escasamente productivos para mejorar el funcionamiento de las instituciones educativas y el rendimiento de los alumnos, los más de 30.000 centros de enseñanzas no universitarias repartidos por toda España –dos tercios de ellos, públicos– han seguido, en general, prestando eficazmente sus servicios. Con una plantilla actual de alrededor de 710.000 profesores –inferior en 11.000 a la existente en 2011/12, pero superior en algo más de 150.000 a la de 2000/01–, en estos últimos quince años esos centros han afrontado un incremento sustancial del número de alumnos –de 6,9 millones en 2000/01 a 8 millones en 2014/15–, en particular extranjeros –de 142.000 en 2.000/01 a más de 700.000 a partir del año 2007–, con las consiguientes dificultades organizativas y docentes para muchos colegios –sobre todo, públicos–.

A lo largo de ese período, las tasas de escolarización entre 15 y 19 años han aumentado diez puntos –de 77% en 2000 a 87% en 2013–, colocándose ligeramente por encima de la media de la OCDE –84%–, en tanto que las de escolarización infantil –31% de 0 a 2 años, y 96% de 3 a 4 años– la han superado con creces –4% y 76%, respectivamente–.

Merece asimismo destacarse que la tasa bruta de población que finaliza la ESO haya alcanzado en 2012/13 –último dato disponible– la cifra más alta registrada: 75,4%. Ciertamente, arrastramos el lastre del abandono educativo temprano, medido en porcentaje de personas entre 18 a 24 años que han alcanzado como máximo un nivel de educación secundaria inferior –primer ciclo de la ESO– y no siguen otra formación. Con un 22% en 2014, España duplica la media comunitaria –11%– y se halla lejos del objetivo del 10% fijado en la Estrategia Europa 2020. Aun así,

“ La senda desde la Logse a la Lomce, pasando por la Loce y la Loe, ha quedado sembrada de agrias disputas partidistas



Fotograma de la película *La clase* (Francia, 2008), una reflexión sobre de qué manera abordar la multiculturalidad y la tendencia a la marginación en los institutos y colegios con especial foco en el polvorín social francés.

también en los últimos años hemos asistido a una reducción de esa tasa –que en 2006 alcanzó el 30%–, en gran medida como consecuencia de la “vuelta a las aulas” de muchos jóvenes expulsados del mercado de trabajo por la crisis.

Esta evolución creciente del alumnado, de las tasas de escolarización y de titulación ha proseguido incluso en años de fuertes restricciones presupuestarias, como las sufridas recientemente. El gasto público en instituciones de educación no universitaria –casi dos terceras partes del gasto público en educación– ha caído desde 2009, lentamente al principio y con más intensidad a partir de 2011, si bien, en términos del PIB, se sitúa en 2013 prácticamente al mismo nivel que en 2000 –2,96%–. Así pues, a pesar de los vaivenes en la política educativa y de la inestabilidad legislativa que ha caracterizado a la ordenación de las enseñanzas en este comienzo de siglo, a pesar también de los recortes y de la contestación que han provocado, el sistema educativo ha seguido educando y albergando numerosas y valiosas historias personales de vocación docente, superación de estrecheces y compromiso con la instrucción y cultura de niños y jóvenes.

Afortunadamente, un sistema educativo maduro, como el nuestro,

es capaz de responder con una mezcla de inercia, flexibilidad e ingenio a cambios políticos e institucionales, y protegerse en cierto modo ante shocks regulatorios y financieros.

Pero sin políticas bien diseñadas, suficientemente financiadas y estables en el tiempo para que puedan producir resultados efectivos, parece muy difícil mejorar las calificaciones de alumnos e instituciones de enseñanza, y avanzar puestos en las cada vez más influyentes evaluaciones internacionales –actualmente encabezadas por PISA, para la educación secundaria, y por los rankings mundiales de universidades, para la educación superior–.

De producirse semejantes avances, los beneficios rebasarían el ámbito de la educación, extendiéndose al mercado de trabajo y al conjunto de la economía, y reforzando la imagen de España en el mundo.

La actual conjunción de cambio político y cambio de ciclo económico ofrece buenas perspectivas para superar la política educativa que ha prevalecido en estos años. Los acuerdos entre partidos deberían

“ Sin políticas estables en el tiempo con resultados efectivos es muy difícil avanzar en la calidad de la enseñanza

marcar a partir de 2016 –y sin dilaciones injustificadas– la política sobre las cuestiones clave para el futuro de la educación española en todos sus niveles. La selección y la promoción del profesorado figura entre las primeras, pero también habría que acordar otras no menos importantes, como los requisitos para la obtención de determinados títulos, los márgenes de autonomía de gestión de las instituciones educativas, la eficacia de los sistemas de rendimiento de cuentas, inspección e información pública, el uso de las evaluaciones externas o la importancia curricular de los distintos tipos de conocimientos y saberes.

A los líderes de los principales partidos corresponde identificar entre sus filas a las personas más capaces de plantear y debatir razonada y honestamente todas estas cuestiones, de escuchar las voces de quienes prestan los servicios educativos –profesores y gestores– y los demandan –familias y empresas–, y de aprender de las experiencias nacionales e internacionales. Si retienen esas capacidades y cuentan con la confianza de sus partidos para negociar, es muy probable que logren lo que necesita cuanto antes nuestro sistema educativo: acuerdos políticos sólidos, basados en metas ambiciosas, pero realistas.